

| | |
|--------------|---------------------------------|
| NOMENCLATURA | : 1. [40]Sentencia |
| JUZGADO | : 18° Juzgado Civil de Santiago |
| CAUSA ROL | : C-4151-2011 |
| CARATULADO | : ZAPATA / FISCO DE CHILE |

Santiago, veintiocho de Enero de dos mil diecinueve

VISTOS:

A fojas 3 comparece don Alejandro de la Vega Herrera, abogado, domiciliado en calle Huérfanos N°1147, oficina 442, comuna de Santiago, en representación judicial de don Pedro Alejandro Zapata Sáez, tripulante de naves especiales, don Alejo Manuel Navarro Bustos, tripulante de naves especiales, don Patricio Justino Andrade Peña, tripulante, don José Luis Morales Parra, tripulante, don Pedro José Miguel Abarzua Saenz, tripulante, don Juan Rolando Tobar Torres, tripulante, don Miguel Wenceslao Peña Sáez, tripulante de naves especiales y doña Gabriela del Carmen Esparza Huinca, labores de casa, todos domiciliados para estos efectos en calle Huérfanos N°1147, oficina 442, comuna de Santiago, quien deduce demanda en juicio ordinario de mayor cuantía en contra del Fisco de Chile, persona jurídica de derecho público, representada por el Consejo de Defensa del Estado, a través de su presidente don Sergio Urrejola Monckeberg, ambos domiciliados en calle Agustinas N°1687, comuna de Santiago, a fin de que se declare su obligación de otorgar los beneficios y prestaciones pecuniarias y cualesquiera otra naturaleza, a que tenían derecho a acceder sus representados por aplicación de lo previsto en el artículo 173 de la Ley General de Pesca y disposiciones reglamentarias de dicho precepto.

Funda su demanda en que mediante Ley 19.713, publicada en el diario oficial de 25 de enero de 2001, se estableció un límite máximo de captura por armador debiendo entonces distribuir anualmente la cuota global de captura asignada al sector industrial para la unidad de pesquería entre los armadores que tengan naves con autorización de pesca vigente a la época para desarrollar actividades pesqueras extractivas en ella.

Dice que para el cálculo de la cuota global anual de captura la ley estableció un procedimiento de cálculo que provocó necesariamente que las empresas



Foja: 1

relacionadas con la extracción de biomasa marina mediante métodos industriales ajustaran sus procesos productivos a la nueva realidad, reduciendo la dotación del personal ante el exceso de oferta de mano de obra.

Menciona que lo anterior provocó efectos indeseables inmediatos en los trabajadores de dicha área y sus familias al suprimirse fuentes de trabajo, lo que llevó al gobierno de turno a introducir modificaciones en la Ley General de Pesca que permitiesen resolver o aportar soluciones a los problemas generados a los trabajadores por la Ley 19.713. Al efecto, se dictó la Ley 19.849 que insertó un nuevo artículo 173 a la Ley del ramo. Además, por el artículo 23 de la ley 19.713, también modificado por la por la Ley 19.849, se señaló que el primer cuerpo legal tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012 con las excepciones indicadas en su propio texto. Señala que la reglamentación de aquella parte del precepto se plasmó en el Decreto Supremo N°179, de 9 de octubre de 2003 de la Subsecretaría de Pesca por el que se aprueban criterios y procedimiento para la asignación de beneficios del “Programa de Capacitación, Apoyo Social y Reconversión Laboral para trabajadores desplazados del sector pesquero industrial bajo la vigencia de la Ley N°19.713” (en adelante “Procedimiento de Asignación de Beneficios”); y el Decreto Supremo N°180, de 9 de octubre de 2003 de la Subsecretaría de Pesca que crea el “Programa de Capacitación, Apoyo social y Reconversión Laboral para trabajadores desplazados del sector pesquero industrial durante la vigencia de la ley 19.713” (en adelante el “Programa”). Respecto del D.S. 180 establece que los beneficios que se concedan consistirán, exclusivamente, en prestaciones que importen la capacitación, el apoyo social y la reconversión laboral, definiendo en cada caso a que se refiere cada nomenclatura. Con todo, excluye expresamente el pago de indemnizaciones y/o compensaciones asociadas al término de los contratos de trabajo. Además, establece como condición necesaria para acceder a los beneficios, además de la cesantía efectiva entre el 25 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2002, el hecho de no percibir o haber percibido ingresos por \$250.000 o más. Se contemplan como beneficiarios, pero sólo de becas, a los hijos de los trabajadores pesqueros desplazados

En lo concerniente al D.S 179, el “procedimiento de asignación de beneficios”, reglamenta de modo particularizado el procedimiento de postulación a los beneficios y precisa que los mismos se otorgaran por una sola vez. En todo caso, dichos fondos deben contemplarse en el presupuesto de la nación, pero se establece como un hecho cierto y dado, que los mismos no permitirán financiar de sola una vez a todos los postulantes, por lo que se priorizará según los factores establecidos en el reglamento. Con todo, para postular al reconocimiento de “beneficiario” ello debía hacerse dentro del plazo de 30 días siguientes a la fecha de publicación del cuerpo normativo



Foja: 1

aunque ello sólo importaba adquirir el derecho de postular a los diversos procesos de selección que se realizarían en lo sucesivo.

Refiere que, a la fecha, todo el proceso se encuentra focalizado en el Consejo de Administración Pesquero, y el financiamiento se extrae del Fondo de Administración.

Sostiene que sus representados y el señor José Polidoro Andrade Peña, por quien pretende su viuda doña Gabriela del Carmen Esparza Huinca, fueron admitidos al “programa” y quedaron habilitados para la percepción de los beneficios asociados al reconocimiento de la calidad de beneficiarios.

Sin embargo, refiere, por problemas derivados de la implementación del programa por parte de la autoridad, se produjo un severo retraso en la concesión de los beneficios, de forma tal que, al año 2005, habíase suscrito con la autoridad del área sendos documentos dando cuenta de los compromisos asumidos.

Indica que el Subsecretario de Pesca de la época hizo eco de rumores en cuanto a la existencia de grupos de presuntos beneficiarios lo que se tradujo en la suspensión de la entrega o la recepción por sus representados y el señor José Polidoro Andrade de cualquiera de los beneficios asociados al programa. Pero, además y lo más gravoso, le atribuyó la ejecución de conductas reprobables, configurativas de delito y en todo caso asociando la estigmatización de los pares pues se les etiquetó como “aprovechadores”.

Expresa que, como se encontraba objetada la distribución y asignación de recursos fiscales, la Contraloría General de la República dispuso la instrucción de un sumario administrativo en la subsecretaría de pesca radicándose en la Contraloría General de Valparaíso, el que arrojó como responsables de actividades irregulares en relación con el programa al propio Subsecretario de Pesca de la época y a un subalterno suyo.

Indica que de lo latamente expuesto es posible definir dos períodos en la aplicación de las regulaciones normativas derivadas del artículo 173 de la Ley General de Pesca y sus disposiciones reglamentarias, con relación a los trabajadores pesqueros de sus fuentes laborales por los efectos del establecimiento de cuotas de captura en el año 2001: un primer periodo entre los años 2002 y hasta el 2005 en el que sólo se logró que a sus representados se les reconociera la calidad de beneficiarios conforme a los criterios del “Programa” y del “Procedimiento de Asignación de Beneficios”, más no accedieron a ningún beneficio o prestación a pesar de haberse suscrito instrumentos que darían cuenta de ello; un segundo periodo que va del año 2005, desde el inicio del sumario administrativo realizado por la Contraloría General de la República y hasta la fecha de notificación de la demanda en el



Foja: 1

que los diversos agentes relacionados con la calificación y otorgamiento de beneficios, especialmente la Subsecretaría de Pesca y el Consejo de Administración Pesquero se han resistido a realizar las evaluaciones y reevaluaciones pertinentes respecto de las carpetas de antecedentes de sus representados a fin de examinar la pertinencia que se les paguen los beneficios devengados a la fecha.

Indica que el Estado de Chile ya el año 2003 reconoció la existencia de las deudas originadas en el artículo 173 de la Ley General de Pesca con respecto de los tripulantes pesqueros comparecientes en autos al suscribirse protocolo de acuerdo por el cual se obliga a proporcionar, entre otras prestaciones, becas, fondos de manutención y programas de apoyo económico y productivo. Lo anterior estaría confirmado en el año 2005 mediante respuesta de la Subsecretaría General de la Presidencia, cuyo titular a la época confirma el compromiso y obligación de proporcionar prestaciones consistentes en becas de mantención y movilización, empleos con remuneración asegurada por \$160.000 y la entrega de \$107.000 para la materialización de proyectos productivos, sin perjuicio de los demás beneficios contenidos en los cuerpos legales y reglamentarios. Agrega que lo anterior se vuelve a confirmar en los acuerdos celebrados en el mes de abril de 2007 suscrito por las autoridades del Ejecutivo, representantes de los trabajadores y parlamentarios de la VIII Región.

En cuanto al derecho, reitera la idea de que sus representados al presentar la postulación dentro de plazo y que cumplieran con los requisitos que tanto la Ley General de Pesca y los Decretos Supremos N° 179 y 180 del año 2001 exigían, por lo que estando reconocida sus calidades de beneficiarios, lo que procedía era que se diese cumplimiento al otorgamiento de los beneficios asociados a las normas citadas, esto es, establecer beneficios conforme a las cantidades de dinero asociados a su establecimiento provenientes de la partida presupuestaría contemplada en el presupuesto de la nación, asociada al fondo de administración pesquero. De lo anterior, colige que resulta evidente que la selección es de carácter anual y que la selección de los beneficiarios que percibirán beneficios prestacionales se resuelve conforme a la metodología diseñada por los decretos reglamentarios anteriormente señalados.

Luego, cita los artículos 1567, 1568 del Código Civil.

Adiciona que de conformidad al artículo 173 del Código de Procedimiento Civil, se reserva para la etapa de ejecución del fallo la determinación de los beneficios y de los montos correspondientes a cada uno de los demandantes.

Concluye, en mérito de lo expuesto, solicitando tener por interpuesta demanda en juicio ordinario en contra del Fisco de Chile, ya individualizado, admitirla a tramitación y en definitiva declarar que el demandado se encuentra obligado a



Foja: 1

pagar todos y cada uno de los beneficios contemplados en los cuerpos normativos legal y reglamentarios que se refieren a la capacitación, apoyo social y reconversión laboral para los trabajadores que, durante el período de vigencia de la ley 19.713 hayan perdido su empleo; reservándose la determinación de la especie y montos de cada uno en la etapa de ejecución del fallo, con costas.

A fojas 43 doña Irma Soto Rodríguez, abogada procuradora Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del estado, contesta la demanda, negando expresamente la versión de los hechos expuesta en el libelo pretensor de autos y las consecuencias jurídicas que de ellos se ha pretendido extraer en el libelo excepto aquéllos que sean expresamente reconocidos en su contestación.

En primer lugar, opone la excepción de litispendencia de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil en relación con la demanda que los actores han interpuesto en contra del Fisco de Chile ante otro Tribunal Civil de Santiago.

Sostiene que los actores ante el 5° Juzgado Civil de Santiago dedujeron acción de cobro de pesos en los autos Rol N°18.754-2008 caratulados “Sapiain Pizarro y otros con Fisco de Chile”, mediante la cual han pretendido se condene al Fisco a pagarles a ellos y a otros 52 actores más, la suma de \$1.480.173.740.- más reajustes, intereses y costas correspondientes a los beneficios derivados de la aplicación de la ley 19.849 en relación a la ley 19.713 que modificó la Ley General de Pesca y Acuicultura.

Refiere que en estos autos civiles los 8 actores han deducido una nueva acción de cobro de pesos solicitando también el pago de todos y cada uno de los beneficios a que tenían derecho por aplicación de la Ley 19.713 y disposiciones reglamentarias de dicho precepto aunque no señalaron el monto, reservándose para la etapa de ejecución del fallo la determinación de la especie y de los montos correspondientes de cada beneficio y con relación a cada demandante.

Expresa que en el juicio del Quinto Juzgado Civil de Santiago se encuentra constituida la relación procesal ya que fue notificada la demanda, configurándose la identidad legal de las partes de ambos juicios lo que versan sobre la misma materia. Por consiguiente, a fin de evitar que las partes litigantes pretendan subsanar los defectos cometidos en un juicio mediante otro diverso, procedería que se acoja la presente excepción y rechace la demanda.

En segundo lugar, opone la excepción de pago haciendo una referencia al marco legal y reglamentario de los beneficios demandados singularizando los



Foja: 1

beneficios efectivamente entregados a los 7 demandantes y el cónyuge de doña Gabriela del Carmen Esparza Huinca, a saber:

- a) Pedro José Miguel Abarzúa Sáenz: recibió \$2.250.000 en el marco del Programa de Capacitación, Apoyo Social y capacitación del año 2003, cuya nómina de beneficiarios fue fijada por Resolución N°33353 de 2003.
- b) José Polidoro Andrade Peña: cónyuge de la demandante doña Gabriela del Carmen Esparza Huinca, recibió la suma de \$2.250.000 en el marco del Programa de Capacitación, Apoyo Social y capacitación del año 2003.
- c) Patricio Justino Andrade Peña: se hizo acreedor de la cantidad de \$2.250.000 del Programa de Capacitación, Apoyo Social y Capacitación del año 2003.
- d) José Luis Morales Parra: se le pagó \$3.300.000 en el marco del Programa de Capacitación, Apoyo Social y Capacitación del año 2003.
- e) Alejo Manuel Navarro Bustos: recibió en total la cantidad de \$4.474.000 que se desglosan en la suma de \$3.300.000 del Programa de Capacitación, Apoyo Social y Capacitación del año 2003, y en la cantidad de \$1.174.000 en el marco del Programa de Apoyo Social consistente en aporte para gastos de educación de hijos de tripulantes beneficiarios de la Ley 19713 (aprobado por Resolución N°3402 de 2007).
- f) Miguel Wenceslao Peña Sáez: recibió en total \$3.500.000 correspondientes a la suma de \$3.300.000 dentro del Programa de Capacitación, Apoyo Social y Capacitación del año 2003 y a la cantidad de \$200.000 del Programa de Apoyo Social, referido a becas básicas.
- g) Juan Rolando Tobar Torres, por su parte se le entrego en total \$5.855.000 cuyo desglose es el siguiente: \$3.300.000 en el marco del Programa de Capacitación, Apoyo Social y Capacitación del año 2003, \$1.035.000 del Programa de Apoyo Social, consistente en aporte para gastos de educación de hijos de tripulantes beneficiarios de la ley 19713, año 2007 (aprobado por Resolución N°2739 de 2007) y finalmente la cantidad de \$1.520.000 dentro del Programa de Apoyo Social, consistente en aporte para gastos de educación de hijos de tripulantes beneficiarios de la Ley 19713 del año 2007 (aprobado por Resolución N°3077 de 2007).



Foja: 1

- h) Pedro Alejandro Zapata Sáez: recibió la cantidad de \$1.100.000 en el en el marco del Programa de Capacitación, Apoyo Social y Capacitación del año 2003.

En consecuencia, no sería efectivo lo afirmado por los actores en cuanto al hecho que en el período correspondiente entre los años 2002 y 2011 –por una u otra razón- no habrían accedido ningún beneficio o prestación. En total, y hasta la fecha a los 8 beneficiarios se les ha entregado un monto global de \$24.979.000. De este modo, y teniendo presente que conforme al artículo 3° D.S N°179 los beneficios se entregarán por única vez a cada trabajador beneficiado es que opone la excepción de pago contra la acción de los 8 demandantes.

En tercer lugar, alega la improcedencia de la demanda al carecer los actores del derecho a cualquier otro beneficio distinto de aquellos que se les entregaron.

Los demandantes sostienen que reconocida la calidad de beneficiarios del “Programa de Capacitación, Apoyo Social y Reconversión Laboral para trabajadores desplazados del sector pesquero industrial durante la vigencia de la Ley 19.713 por la entidad administradora del programa sólo cabía que se diese cumplimiento al otorgamiento de los beneficios regulados en los D.S. N°179 y 180 de 2003 ya que al haber sido admitidos al “programa” habrían quedado habilitados para la percepción de los beneficios asociados al reconocimiento de la calidad de beneficiario pudiendo “requerir la consideración para uno o todos cualesquiera de los ámbitos de beneficios que el “Programa” contempló.

Sostiene que dicha tesis carece de sustento jurídico pues ni la ley ni la normativa reglamentario en parte alguna establece lo que los actores pretenden, pues de los artículos 173 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, introducido por la Ley 19.849 y los artículos 6, 2, 5 y 9 del D.S. 179 y el artículo 7 del D.S. 180 se concluye que el simple hecho de cumplir los requisitos y postular al beneficio no significa automáticamente la obligación para el Fisco de otorgarlo, ya que para la concesión de un beneficio es menester la dictación de una resolución o acto administrativo de la autoridad y que existe la disponibilidad presupuestaria anual, tal como lo establece el inciso 3 del citado artículo 173.

Adiciona que los 7 demandantes y don José Polidoro Andrade Peña, por quien pretende su viuda doña Gabriela Esparza Huinca, figura en los listados de los Anexos N°2 y 3 del Informe de Fiscalización N°150 de 2005 de la Contraloría General de la República (en relación al proceso de entrega de beneficios del Programa de Capacitación, Apoyo Social y Reconversión Laboral para trabajadores desplazados del Sector Pesquero Industrial, durante la vigencia de



Foja: 1

la Ley 19.7133) por haber incurrido en infracciones o irregularidades en la prestación documentación.

Menciona que en el Anexo N°2 –que estableció la nómina de beneficiarios que respaldaron declaraciones juradas con boletas de prestación de servicios de terceros falsas del contribuyente don Sergio Gajardo Jara, y que por tanto no acreditaron su antigüedad en el sector pesquero industrial y su despido a través de la presentación del finiquito como establecen los reglamentos-figuran los demandantes de autos. Por su parte en el Anexo N°3 del referido informe de Fiscalización n°150 figura el actor don Pedro Alejandro Zapata Sáez entre quienes acreditaron su calidad de beneficiarios con boletas de prestación de servicios de terceros falsas de la contribuyente doña Ingrid Yanet Concha Fritz y declaración jurada que indica haber trabajado para ésta en la Empresa Pesquera Iquique Guanaye S.A. Derivado de lo anterior, en mayo de 2006 el Jefe de la División de Auditoría Administrativa de la Contraloría ordenó a la Subsecretaría de Pesca efectuar la denuncia ante los Tribunales de Justicia con el objeto de perseguir responsabilidades, fundado en que “la mayoría de las declaraciones juradas presentadas por los beneficiarios para la obtención de beneficios habría faltado a la verdad puesto que se refieren a un período laboral acreditado con boletas de honorarios presuntamente falsificadas, y en otros casos, estarían adulteradas”. A raíz de esta denuncia, se inició investigación RUC N°0600754355 en la Fiscalía Local de Concepción, por el delito de falsificación lo que en concordancia con los artículos 12 y 4 del D.S N°179 los postulantes a los beneficios declarar y adjuntar los antecedentes en forma fiel, veraz y oportuna y la entrega de información no fidedigna, falsa o con adulteración sería causal suficiente para el rechazo de la postulación lo cual debe entenderse desde luego, sin perjuicio del ilícito penal. En consecuencia, dado que los 7 demandantes y don José Polidoro Andrade Peña presentaron boletas falsas de prestación de servicios de terceros, respaldando con ello las declaraciones juradas faltaron a la verdad en las informaciones dadas para la acreditación de los antecedentes de la postulación, con lo que de conformidad al artículo 12 n°1 del D.S N°179, perdieron su calidad de beneficiarios, sin perjuicio de no haber acreditado su calidad mediante la presentación de la documentación exigida en los reglamentos del Programa.

En cuarto lugar, alega la improcedencia la petición de condena a pagar los beneficios que se devenguen con posterioridad a la presentación de la demanda sería. La funda en que los actores olvidan que el régimen financiero del Estado se sustenta en un principio fundamental, cual es el principio de la legalidad del gasto, que consagran diversos preceptos constitucionales y legales, y en cuya virtud los gastos públicos deben ajustarse estrictamente a la ley, sin que pueda ordenarse pago alguno que no esté contemplado en la Ley



Foja: 1

de Presupuesto del Sector Público, aprobada anualmente, o en una ley especial que señale el correspondiente financiamiento.

En quinto lugar, alega la improcedencia de la petición de reserva de la determinación de los beneficios y sus montos para la etapa de ejecución del fallo, fundando en que el artículo 173 del Código de Procedimiento Civil se refiere sólo a las obligaciones de origen contractual, según reiteradamente lo ha establecido la jurisprudencia, excluyéndose de su ámbito de aplicación a las obligaciones legales. En el caso de autos, no estamos ante la solicitud de frutos o indemnizaciones en el ámbito contractual pues no estamos en presencia de contrato ni de obligaciones que emanen de él.

En último lugar, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años de cualquier beneficio ya devengado en conformidad a los artículos 2514 y 2515 en relación con el artículo 2497, todos del Código Civil.

Refiere que teniendo en cuenta que la demanda fue notificada a su representado con fecha 8 de septiembre de 2011, se encuentra igualmente prescrito cualquier beneficio devengado con anterioridad al 8 de septiembre de 2006.

En efecto, dice, si el Tribunal declarara que a cualquiera de los actores le corresponde alguno de los beneficios reclamados en la demanda, cabe tener presente que el cobro de ellos está sujeto a la prescripción de 5 años contados desde que la obligación se hizo exigible por lo que de conceder los beneficios reclamados solo podrán efectuarse respecto de aquellos devengados a contar del 8 de septiembre del año 2006.

Concluye, en mérito de todo lo expuesto y de lo señalado por los artículos 308, 309 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y demás citas legales y reglamentarias, solicitando por contestada la demanda, rechazándola íntegramente, con costas.

A fojas 65 obra escrito de réplica.

Señala que existe incongruencia en la contestación del demandado sobre la negación de los hechos en que se basa la demanda, desde que en los diferentes capítulos que la conforman se hace una referencia inequívoca a los demandantes, su petición de reconocimiento de beneficiarios de los programas contemplados por los D.S. N°179 y D.S. 180; la existencia del sumario administrativo realizado por la Contraloría General de Valparaíso y la incorporación en el mismo, con sospecha de autores de un presunto ilícito, de los actores y del fallecido don José Polidoro Andrade Peña.

Sobre la excepción de litispendencia opuesta, solicita su rechazo pues no concurren todos los presupuestos que la ley previene para que se colme la



Foja: 1

excepción alegada desde que las materias y las causas de pedir en ambos procesos es distinta: tal como lo informa la demandada, el juicio sustanciado ante el 5° Juzgado Civil de Santiago versa sobre “cobro de pesos”, esto es, la pretensión consistente en la declaración de la obligación de pagar una suma de dinero a quienes la requieran por el ejercicio de la acción en aquel juicio. En cambio, la pretensión manifestada en autos consiste en que el Fisco otorgue las prestaciones que se han devengado por el régimen de beneficios establecidos en los D.S. N° 179 y 180 de 2003 cuyo otorgamiento se interrumpió por parte de la demandada como consecuencia de haberles imputado la comisión de hechos ilícitos y haberlos incorporados en nóminas como presuntos beneficiados que habría cometido irregularidades.

En lo referente a la excepción de pago, la misma debe rechazarse, pues lo sostenido por la contraria como sustento de su alegación de pago, son aquellos beneficios obtenidos por los actores, en la etapa inicial del programa. Sin embargo, ellos no son objeto del reclamo en la misma y, por consiguiente, su exposición no puede lograr distraer respecto de la efectiva reclamación que se hace por la demanda.

En cuanto a la improcedencia de la demanda al carecer los actores del derecho a cualquier otro beneficio distinto de aquellos que les entregaron. En efecto, aceptada la razón que los actores tienen la calidad de beneficiarios del programa contemplados por los D.S. 179 y 180 ambos de 2003, la pretensión manifestada por aquéllos consiste en obtener el reconocimiento que tienen derecho a la percepción de todos aquellos beneficios que se devengaron en el período en que, por decisión de la Administración del Estado, les fue impedido postular y acceder a los mismos.

Sobre la improcedencia de la petición de condena a pagar los beneficios que se devenguen con posterioridad a la presentación de la demanda, dicha solicitud resulta absolutamente impertinente, en consideración a que el programa de beneficios contemplados por los D.S. 179 y 180 de 2003, establecen un período de vigencia para el otorgamiento de aquéllos, que expira el 31 de diciembre de 2012, esto es, en una fecha posterior a la notificación de la demanda.

Respecto a la alegación sobre improcedencia de la petición de reserva de determinación de los beneficios y sus montos para la etapa de ejecución del fallo, explica que debe ser rechazada pues conforme a lo previsto en el artículo 3° inciso final del Código Civil, los efectos vinculantes de las sentencias judiciales sólo alcanzan a las partes del proceso, por lo que no afectan la decisión que pueda tomarse en el juicio.

Sobre la alegación subsidiaria de prescripción extintiva, al respecto cabe oponer la interrupción natural prevista por el artículo 2518 inciso 2° del



Foja: 1

Código Civil, a lo menos tácitamente desde que el Estado de Chile ya el año 2003, reconoció la existencia de las deudas originadas en el artículo 173 de la Ley General de Pesca con respecto a los tripulantes pesqueros que se mencionan en este libelo pretensor, toda vez que se suscribe un protocolo de acuerdo por el cual se obliga a proporcionar, entre otras prestaciones, becas, fondos de manutención y programas de apoyo económico y productivo. Lo anterior, se vuelve a confirmar en los acuerdos celebrados en el mes de abril de 2007, suscritos por autoridades del ejecutivo, representantes de los trabajadores y parlamentarios de la VIII Región.

A fojas 72 rola dúplica de la demandada.

Refiere en lo tocante a la negación de los hechos efectuados en su contestación y la supuesta calidad de beneficiarios de los programas contemplados en los D.S. 179 y 180, no existe incongruencia, pues su parte ha negado expresamente la versión de los hechos expuesta en la demanda de autos y las consecuencias jurídicas que los actores extraerían de ellos, con la salvedad de los hechos expresamente reconocidos en la contestación. En ese contexto, su parte señaló que los actores fueron favorecidos con prestaciones de capacitación y beneficios pecuniarios, en el marco de dos programas. Además, su parte afirmó con la Contraloría General de la República efectuó una fiscalización a la entrega de beneficios por la Subsecretaría de Pesca, evacuándose informe de fiscalización N°150 de 2005 el que arrojó que 151 personas –entre ellos los actores y don José Polidoro Andrade Peña, por quien demanda su viuda- incurrieron en las infracciones ya señaladas en la contestación.

Sobre la excepción de litispendencia el planteamiento sostenido por la actora es errado. En ambas causas la materia es la misma, pues con distinto ropaje se ha disfrazado la misma acción.

Sostiene sobre la excepción de pago, que la contraria en su escrito ha confesado que recibieron los beneficios de los D.S. 179 y 180 de 2003, al menos en lo que ella llama “en la etapa inicial”, lo que basta para rechazar la demanda. Los beneficios recibidos por los actores fueron los indicados en el n° 3.2 de la contestación de la demanda, con la única salvedad que corrigen la información respecto de don Pedro Alejandro Zapata Sáez, quien habría recibido la cantidad de \$3.300.000 en el marco del Programa de Capacitación, Apoyo Social y Reconversión Laboral, del año 2003, y no la cantidad de \$1.100.000 como erradamente se señaló.

En lo referente a la alegación fiscal de que los actores carecen del derecho a otros beneficios distintos de los recibidos, la actora sostiene en su réplica que ésta sería la materia controvertida y que teniendo la calidad de beneficiarios del programa de los D.S. 179 y 180 ellos tenían el derecho a la percepción de



Foja: 1

todos los beneficios que se devengaron en el período en que por decisión de los funcionarios se les habría impedido postular los beneficios. Dicho planteamiento, manifiesta, es errado pues ni la ley ni la normativa reglamentaria en parte alguna establecen lo que los actores pretenden pues el simple hecho de cumplir los requisitos y postular al beneficio no significa automáticamente la obligación para el Fisco de otorgarlo. Por lo demás, en cuanto al fondo, reitera que la petición de los actores transgrede el principio de legalidad del gasto.

Respecto de la improcedencia de la reserva de la determinación de los beneficios y montos para la etapa de ejecución, lo expuesto por la actora es errado porque la jurisprudencia ha determinado que el artículo 173 del Código de Procedimiento Civil se refiere sólo a las obligaciones de origen contractual excluyéndose de su ámbito de aplicación a las obligaciones legales.

Finalmente, sobre la excepción de prescripción, no es efectivo que hubiera operado una interrupción de la prescripción extintiva alegada ya que el Estado, ni en los supuesto documentos de 2003, 2005 y 2007 citados por su contraparte, ha efectuado un reconocimiento expreso ni tácito de una deuda determinada del Fisco por concepto de beneficios derivados de los D.S. 170 y 180 de 2003, respecto de los 8 demandantes de autos.

Por tratarse de un Juicio de Hacienda, se omitió el trámite de conciliación.

A fojas 79 y complementado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago a fojas 529, se procedió a recibir la causa a prueba, rindiéndose la documental y testimonial que rola en autos.

A fojas 746 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

I.- En cuanto a las tachas

1º) Que, a fojas 143 y 146, la parte demandada deduce tacha en contra de los testigos presentados por la actora, don Eduardo Jara Carriel y don Ulises Armando Daza Ramírez por la causal del artículo 358 número 1 del Código de Procedimiento Civil, fundada en que los deponentes son parientes por afinidad en segundo grado.

2º) Que, la parte demandante evacuando los traslados solicita el rechazo de las mismas por cuanto las tachas deducidas no han sido acreditadas de manera alguna por parte de la demandada.

3º) Que, las tachas deducidas serán acogidas pues de la sola declaración de los testigos se configura la causal de inhabilidad del artículo 358 n°2 del Código de Procedimiento Civil.



Foja: 1

4º) Que, a fojas 375, 380 y 383 la parte demandante deduce tacha en contra de los testigos presentados por la demandada, doña Vivian Denisse Cerda Quiroz, don Jorge Alfonso Acevedo Karlezi y don Robinson Francisco Quiero Zárate, por la causal del artículo 358 n° 5 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la calidad de dependiente de la persona que exige su testimonio.

5º) Que, la parte demandada evacuando los traslados, solicita el rechazo de estas pues el vínculo de los testigos no es de dependencia en los términos que exige la norma legal invocada, sino que está determinado por un estatuto especial de derecho Público, ajeno a la dependencia contractual propia del ámbito privado.

6º) Que, las tachas establecida en el número 5 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, en el caso de los funcionarios públicos que dependen del Fisco, el vínculo de subordinación no les impide declarar con imparcialidad, toda vez que la ley establece un estatuto jurídico que garantiza la independencia del declarante, puesto que su relación contractual laboral está totalmente regulada en la ley, sin que exista un vínculo estrecho de dependencia entre el Fisco y el testigo, razón que induce a desestimar las tachas deducidas.

II.- En cuanto a las excepciones.

7º) Que, la parte demandada deduce excepción de Litispendencia fundado en que se encuentra en tramitación entre las mismas partes acción de cobro de pesos en el 5º Juzgado Civil de Santiago, rol “C-18754 - 2008” caratulados “Sapiain Pizarro y otros con Fisco de Chile” a fin de que se condene al fisco pagar a ellos y otros 52 actores más, la suma de \$1.480.173.740 más reajustes, intereses y costas correspondientes a los beneficios derivados de la aplicación de la Ley 19.849 en relación a la Ley 19.713 que modificó la Ley General de Pesca y Acuicultura. Argumenta que la presente acción constituye una nueva acción de cobro de pesos del pago de todos y cada uno de los beneficios por aplicación de la ley 19.713 y demás reglamentarias normas reglamentarias.

8º) Que, conforme a lo expuesto en el libelo, especialmente el petitorio del mismo, los actores de autos pretenden que se declare que el demandado se encuentra obligado en abstracto a pagar todos y cada uno de los beneficios normativos y reglamentarios durante el periodo de vigencia de ley 19.713, sin efectuar peticiones concretas de cobro de una obligación determinada, lo que por lo demás ratifica y señala en forma expresa al evacuar el trámite de réplica.

9º) Que, de lo antes referido aparece que entre ambas causas no concurren la identidad de causa de pedir, ya que esta se encuentra determinada en el



Foja: 1

petitorio del libelo, por lo que no concurriendo la triple identidad necesaria se procederá a rechazar la excepción de litispendencia en definitiva.

10º) Que, la parte demandada opone excepción de pago respecto de la cual efectúa una referencia al marco legal y reglamentario de las normas legales que rigen la materia, esto es la ley N° 19.713 y los D.S. N°s 179 y 180, ambos del año 2011, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Subsecretaría de Pesca, y especifica los beneficios efectivamente entregados a los demandantes y la cónyuge de don José Polidoro Andrade Peña, doña Gabriela del Carmen Esparza Huinca, mediante diversos actos administrativos que individualiza.

11º) Que, del examen de la demanda y del petitorio aparece claramente, según ya se ha expresado, que en estos autos los actores no han pretendido el cobro de obligaciones específicas y determinadas, únicas respecto de las cuales podría caber el pago invocado en la excepción en comento. Así al tenor de lo demandado no cabe sino desestimar en definitiva la excepción de pago en los términos planteados.

12º) Que, por último el demandado opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años, planteándola en los siguientes términos: “para el caso que el Tribunal declare que a los actores les corresponde alguno de los beneficios reclamados, se encontraría prescrito cualquier beneficio devengado con anterioridad al 8 de septiembre de 2006, toda vez que la demanda le fue notificada con fecha 8 de septiembre de 2011”.

13º) Que, a fin de resolver la presente excepción resulta necesario tener presente que la prescripción es un modo de extinguir las acciones y derechos ajenos por no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales; y que quien quiera aprovecharse de la misma debe alegarla.

La alegación a que hace referencia el artículo 2493 del Código Civil, hace necesario que quien pretenda beneficiarse debe especificar hechos concretos en que la funda los que pone en conocimiento del Tribunal a fin que éste resuelva sin actuar de oficio. De este modo el Tribunal no está dentro de las facultades del sentenciador suplir la voluntad del articulista.

De lo expresado, la excepción concreta planteada al tribunal y en comento no puede prosperar debiendo ser rechazada en definitiva ya que fue planteada en términos tan amplios que carece de hechos y peticiones concretas puestos en conocimiento de esta sentenciadora.

III.- En cuanto al Fondo



Foja: 1

14º) Que, A fojas 3 comparece don Alejandro de la Vega Herrera, abogado, domiciliado en calle Huérfanos N°1147, oficina 442, comuna de Santiago, en representación judicial de don Pedro Alejandro Zapata Sáez, tripulante de naves especiales, don Alejo Manuel Navarro Bustos, tripulante de naves especiales, don Patricio Justino Andrade Peña, tripulante, don José Luis Morales Parra, tripulante, don Pedro José Miguel Abarzua Saenz, tripulante, don Juan Rolando Tobar Torres, tripulante, don Miguel Wenceslao Peña Sáez, tripulante de naves especiales y doña Gabriela del Carmen Esparza Huinca, labores de casa, todos domiciliados para estos efectos en calle Huérfanos N°1147, oficina 442, comuna de Santiago, quien deduce demanda en juicio ordinario de mayor cuantía en contra del Fisco de Chile, persona jurídica de derecho público, representada por el Consejo de Defensa del Estado, a través de su presidente don Sergio Urrejola Monckeberg, ambos domiciliados en calle Agustinas N°1687, comuna de Santiago, conforme a los argumentos de hecho y de derecho reseñados en la parte expositiva de la sentencia, solicitando que en definitiva se declare que el demandado se encuentra obligado a pagar todos y cada uno de los beneficios contemplados en los cuerpos normativos legal y reglamentarios que se refieren a la capacitación, apoyo social y reconversión laboral para los trabajadores que, durante el período de vigencia de la ley 19.713 hayan perdido su empleo; reservándose la determinación de la especie y montos de cada uno en la etapa de ejecución del fallo, con costas.

15º) Que a fojas 43 la parte demandada contesta la demanda solicitando el rechazo de la misma conforme a los argumentos de hecho y de derecho reseñados en lo expositivo de este fallo.

16º) Que, incumbe probar las obligaciones o su extinción, al que alega aquellas o ésta conforme lo preceptuado en el artículo 1698 del Código Civil.

17º) Que a fin de acreditar sus pretensiones, la parte demandante acompañó documental no objetada consistente en: i) Comunicación de 7 de noviembre de 2006, suscrita por doña Victoria Sánchez Mardones, contador auditor, funcionaria de la División de Auditoria Administrativa de la Contraloría General de la República, por la que describe los lineamientos del informe N° 150/2005, que contiene los resultados de la auditoria efectuada a la Subsecretaría de Pesca con relación al "Programa de Capacitación, Apoyo y Reconversión Laboral para trabajadores desplazado del sector pesquero industrial durante la vigencia de la Ley n° 19713; ii) Comunicación de 15 de enero de 2008, suscrita por don Ricardo Bravo Herrera, Secretario Ejecutivo del Fondo de Administración Pes-quero, dirigido a doña Dorothy Pérez Gutiérrez, Contralor Regional de Valparaíso, por la que pide autorización para revisar los carpetas de los 151 casos señalados como irregulares en el informe Auditorial n° 150/2005; iii) Resolución Exenta N° 0026/2009, de 5 de febrero



Foja: 1

de 2009, dictado por la Contraloría General de la República, Contraloría Regional Valparaíso, por la que se imputan cargos a funcionarios y ex funcionarios de la Subsecretaría de Pesca, en relación al sumario ordenado instruir por la Resolución N° 3.335, de 2005, con sustento en el informe Final N° 150/2005; iv) Copia de la entrevista publicada en el Diario El Sur, en la edición del 8 de marzo de 2009, efectuado al ex Subsecretario de Pesca Sr. Felipe Sandoval Precht, quien dispuso la realización del sumario con-forme al informe N° 150/2005; v) Información bajada desde el portal del Fondo de Administración Pesquero, www.fap.cl, el 22 de enero de 2011, con relación a los Tripulantes desplazados Ley 19.713; vi) Acta de Acuerdo suscrita en el mes de Julio del año 2003, entre dirigentes de Organizaciones Sindicales de Tripulantes de VIII Región y autoridades gubernamentales de la época tales como el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción Sr. Jorge Rodríguez Grossi y el Subsecretario de Pesca Sr. Felipe Sandoval Precht, con el establecimiento del compromiso de regularizar el otorgamiento de los beneficios a quienes postularon y fueron aceptados como parte del "Programa de Capacitación, Apoyo social y Reconversión Laboral, para trabajadores de la industria pesquera nacional, que perdieron su empleo durante la vigencia de la Ley 19.713; vii) Acta de reunión efectuada el 8 de octubre de 2004, entre Andrés González, jefe de gabinete del Subsecretario de Pesca de la época y dirigentes de Organizaciones Sindicales de Tripulantes de la VIII Región, en la que se transcriben y se fijan diversos acuerdos y tópicos con relación al "Programa de Capacitación, Apoyo social y Reconversión Laboral, para trabajadores de la industria pesquera nacional, que perdieron su empleo durante la vigencia de la Ley 19.713; viii) Acta de reunión efectuada el 4 de octubre de 2005, entre Roberto Alvarado Arriagada, encargado del Programa par la Subsecretaria de Pesca y dirigentes de Organizaciones Sindicales de Tripulantes de la VIII Región, por la que se reconoce el otorgamiento de una suma de dinero para costear gastos escalares a familias de quienes se encuentran incluidos en nómina adjunta, y se indica que no hay novedades respecto de otros beneficios hasta que se concluya sumario; ix) Comunicación de 5 de diciembre de 2005, enviado por Rodrigo Egaña Baraona, Subsecretario General de la Presidencia, dirigido a don Agustín Cartes Candia, por la que el representante gubernamental por la cual se ratifica la vigencia de los acuerdos celebrados y los compromisos adquiridos por el gobierno, con relación al "Programa de Capacitación, Apoyo social y Reconversión Laboral, para trabajadores de la industria pesquera nacional, que perdieron su empleo durante la vigencia de la Ley N° 19.713; x) Comunicación de 28 de diciembre de 2005, enviada por Rodrigo Egaña Baraona, Subsecretario General de la Presidencia, dirigida a don Agustín Cartes Candia, por la que el representante gubernamental ratifica la vigencia de los acuerdos celebrados y los compromisos adquiridos por el gobierno, con relación al "Programa de



Foja: 1

Capacitación, Apoyo social y Reconversión Laboral, para trabajadores de la industria pesquera nacional que perdieron su empleo durante la vigencia de la Ley Nº 19.713; xi) Copia del Ord. Nº 1202, de 12 de abril de 2007, suscrito por don Carlos Hernández Salas, Subsecretario de Pesca de la época, dirigido a la Contraloría Regional de Valparaíso, por el cual le formula diversas consultas, especialmente sobre el sumario incoado a propósito del informe Auditorial Nº 150/2005; xii) Copia de Ord. Nº 2519, de Mayo de 2007, suscrito por doña María Guevara Weber, Contralora Regional de Valparaíso, por el que atiende y da respuesta al Oficio Nº 1202 singularizado en el numeral anterior; xiii) Acta de Acuerdo, suscrita con fecha 27 de abril de 2007, entre parlamentarios de la zona, autoridades gubernamentales y dirigentes de Organizaciones Sindicales de Tripulantes de la VIII Región, en la que se transcriben y se fijan diversos acuerdos y tópicos con relación al "Programa de Capacitación, Apoyo social y Reconversión Laboral para trabajadores de la industria pesquera nacional que perdieron su empleo durante la vigencia de la Ley Nº 19.713; xiv) Acta de Acuerdo, suscrita con fecha 27 de abril de 2007 y distinta de la referida en el numeral 13 anterior, entre parlamentarias de la zona, autoridades gubernamentales y dirigentes de Organizaciones Sindicales de Tripulantes de la VIII Región, en la que se transcriben y se fijan diversos acuerdos y tópicos con relación al "Programa de Capacitación, Apoyo social y Reconversión Laboral para trabajadores de la industria pesquera nacional que perdieron su empleo durante la vigencia de la Ley Nº 19.713; xv) Documento de 20 de junio de 2006, denominado "Cumplimiento de la carta compromiso efectuada por la Secretaría General de la Presidencia correspondiente al petitorio 2005", suscrita entre autoridades gubernamentales y dirigentes de Organizaciones Sindicales de Tripulantes de la VIII Región, en la que se transcriben y se fijan diversos acuerdos y tópicos con relación al programa de Capacitación, Apoyo social y Reconversión Laboral, para trabajadores de la industria pesquera nacional, que perdieron su empleo durante la vigencia de la Ley Nº 19.713; xvi) Comunicación de 15 de junio de 2006, enviada y suscrita conjuntamente por los señores Francisco Villa, de SENCE; José Romero, Subsecretario de Pesca; y Rodrigo Díaz, Gobernador Provincial, dirigida a don Agustín Cartes Candia, por la que los representantes gubernamentales ratifican la vigencia de los acuerdos celebrados y los compromisos adquiridos por el gobierno, con relación al Programa de Capacitación, Apoyo social y Reconversión Laboral, para trabajadores de la industria pesquera nacional, que perdieron su empleo durante la vigencia de la Ley Nº 19.713; xvii) Comunicación de 5 de junio de 2003, suscrita por don Ricardo Bravo Herrera, Secretario Ejecutivo del Fondo de Administración Pesquero, dirigido al Sindicato Nacional de Trabajadores Transitorios Industriales Pesqueros, para el cual se refiere a la revisión de carpetas por la detección de presuntas irregularidades en las postulaciones al "Programa de Capacitación, Apoya



Foja: 1

social y Reconversión Laboral, para trabajadores de la industria pesquera nacional, que perdieron su empleo durante la vigencia de la Ley Nº 19.713"; xviii) Comunicación de 7 de julio de 2010, suscrita por María José Gutiérrez Araque, Secretaria Ejecutiva del Fondo de Administración Pesquero, dirigida al Sr. Juan Tobar Torres, por la que se explican los factores y criterios evaluativos para la aceptación o rechazo de las postulaciones a los beneficios del Programa de Capacitación, Apoyo social y Reconversión Laboral, para trabajadores de la industria pesquera nacional, que perdieron su empleo durante la vigencia de la Ley Nº 19.713; xix) Documento elaborado por la Gobernación Provincial de Concepción, en el mes de mayo del año 2007, denominado "Resumen de las actividades realizadas por la Gobernación Provincial de Concepcion, en el marco del Programa de Capacitación, Apoyo social y Reconversión Laboral para trabajadores desplazados del sector pesquero industrial durante la vigencia de la Ley 19713; xx) Certificado de Participación en acciones de Capacitación, otorgado al actor Juan Tobar Torres, el 19 de agosto de 2003, conjuntamente por la entidad OMNIA Consultores Asociados y SERCOTEC, inserto en el Programa de Capacitación, Apoyo social y Reconversión Laboral, para trabajadores desplazados del sector pesquero industrial durante la vigencia de la Ley Nº 19.713; xxi) Comunicación de 2 de agosto de 2004, suscrita por el Director Regional de Sercotec VIII Región Sr. Mauricio Rebolledo Sagrado, dirigida a doña Paulina Moragaño García, en su calidad de integrante del gabinetete Presidencial; xxii) Inserción publicada en la prensa escrita en el mes de diciembre de 2005, por parte del Subsecretario General de la Presidencia de la época Sr. Rodrigo Egaña Barahona, por lo que describe los diversos fritos relacionados con el "Programa de Capacitación, Apoyo social y Reconversión Laboral, para trabajadores desplazados del sector pesquero industrial durante la vigencia de la Ley Nº 19.713; xxiii) Recibo suscrito por el demandante Sr, José Luis Morales Parra, el 9 de febrero de 2004, dando cuenta de la recepción de la suma de \$3.300.000 con relación al "Programa de Capacitación, Apoyo social y Reconversión Laboral para trabajadores desplazados del sector pesquero industrial durante la vigencia de la Ley Nº 19713; xxiv) Documentos (2) denominados "Recepción de Cheque", de 22 de diciembre de 2003 y de 9 de febrero de 2004, por los cuales el Sr. José Luis Morales Parra, da cuenta de haber recibido la suma indicada en el numeral 23.- precedente, en dos cuotas, de monto diverso cada una de ellas; xxv) Autorización simple, datada el 24 de noviembre de 2003, otorgada por el Sr. Jose Luis Morales Parra, a cualesquiera encargados del Programa de Capacitación, Apoyo social y Reconversión Laboral, para trabajadores desplazados del sector pesquero industrial durante la vigencia de la Ley Nº 19713", para que accedan a la información referida a sus ingresos entre los años 2001 y 2002; xxvi) Recibo suscrito por el demandante Sr. Pedro Zapata Sáez, el 9 de febrero de 2004,



Foja: 1

dando cuenta de la recepción de la suma de \$3.300.000.-, con relación al "Programa de Capacitación, Apoyo social y Reconversión Laboral para trabajadores desplazados del sector pesquero industrial durante la vigencia de la Ley N° 19.713; xxvii) Declaración Jurada de Aceptación de Beneficio, suscrita el 17 de enero de 2003 por el Sr. Pedro Zapata Sáez, respecto a su calidad de beneficiario del "Programa de Capacitación, Apoyo social y Reconversión Laboral, para trabajadores desplazados del sector pesquero industrial durante la vigencia de la Ley N° 19.713", y de haber recibido beneficios con cargo a los recursos del referido programa.; xxviii) Mandato extendido par el Sr, Pedro Zapata Sáez, el 5 de noviembre de 2003, a Sercotec, para que esta entidad te descuenta un porcentaje de las sumas que reciba como beneficios del "Programa de Capacitación, Apoyo social y Reconversión Laboral para trabajadores desplazados del sector pesquero industrial durante la vigencia de la Ley N5 19,713, para costear las asesorías que le serían otorgadas; xxix) Documentos (2) denominados "Recepción de Cheque", de 22 de diciembre de 2003 y de 9 de febrero de 2004, por los cuales el Sr. Pedro Zapata Sáez, da cuenta de haber recibido la suma indicada en el numeral 26.- precedente, en dos cuotas, de monto diverso cada una de ellas; xxx) Recibo suscrito por el demandante Sr. Miguel Wenceslao Peña Sáez el 9 de febrero de 2004, dando cuenta de la recepción de la suma de \$3.300.000.-, con relación al Programa de Capacitación, Apoyo social y Reconversión Laboral para trabajadores desplazados del sector pesquero industrial durante la vigencia de la LeyN° 19.713"; xxxi) Declaración Jurado de Aceptación de Beneficio, suscrita el 18 de enero de 2003 por Sr. Miguel Wenceslao Peña Sáez, respecto a su calidad de beneficiario del "Programa de Capacitación, Apoyo social y Reconversión Laboral para trabajadores desplazados del sector pesquero industrial durante la vigencia de la Ley N° 19.713" y de haber recibido beneficios con cargo a los recursos del referido programa; xxxii) Acta de Entrega, datada el 16 de marzo de 2006, no suscrito por Robinson Quiero Zárate, Jefe de Presupuestos de la Subsecretaría de Pesca, pero sí por el Sr. Miguel Peña Sáez, por la que se da cuenta de la recepción de fondos con imputación a gastos de educación, por un monto de \$200.000; xxxiii) Autorización simple, datada el 25 de noviembre de 2003, otorgado por el Sr. Alejo Manuel Navarro Bustos, a cualesquiera encargados del Programa de Capacitación, Apoyo social y Reconversión Laboral, por trabajadores desplazados del sector pesquero industrial durante la vigencia de la Ley N° 19713", para que accedan a la información referida a sus ingresos entre los años 2001 y 2002; xxxiv) Mandato extendido por el Sr. Alejo Manuel Navarro Bustos, el 7 de noviembre de 2003, a Sercotec, para que esta entidad le descuenta un porcentaje de las sumas que reciba como beneficios del "Programa de Capacitación, Apoyo social y Reconversión Laboral para trabajadores desplazados del sector pesquero industrial durante la vigencia de



Foja: 1

la Ley Nº 19713M, para costear las asesorías que le serían otorgadas; xxxv) Acta de Entrega, datada el 14 de diciembre de 2007, por la que se da cuenta de la recepción de fondos por parte de don Alejo Manuel Navarro Bustos, con imputación a gastos de educación, por un monto de \$1.174.000; xxxvi) Declaración Jurada suscrita el 24 de septiembre de 2012, por don Patricio Justino Andrade Peña, por la que expone que sus documentos referidos o su calidad de beneficiario del "Programa de Capacitación, Apoyo social y Reconversión Laboral, para trabajadores desplazados del sector pesquero industrial durante la vigencia de la Ley Nº 19713", se le extraviaron con ocasión del terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2012; xxxvii) Certificado extendido con fecha 26 de septiembre de 2012, por la Directora Ejecutiva del Fondo de Administración Pesquero, por el que la mencionada expone que el Sr. Patricio Justino Andrade Peña se encuentra contemplado en la Resolución Exenta Nº 3.353, de 15 de diciembre de 2003, que fijó nómina de beneficiarios del "Programa de Capacitación, Apoyo social y Reconversión Laboral, para trabajadores desplazados del sector pesquero industrial durante la vigencia de la Ley Nº 19713; xxxviii) Recibo suscrito por el demandante Sr. Pedro Abarzúa Sáenz, 9 de febrero de 2004, dando cuenta de la recepción de la suma de \$2.250.000.-, con relación al Programa de Capacitación, Apoyo social y Reconversión Laboral, para trabajadores desplazados del sector pesquero industrial durante la vigencia de la Ley Nº 19.713; xxxix) Mandato extendido por el Sr. Pedro Abarzúa Sáenz, el 6 de noviembre de 2003, a Sercotec, para que esta entidad le descuente un porcentaje de las sumas que reciba como beneficios del Programa de Capacitación, Apoyo social y Reconversión Laboral para trabajadores desplazados del sector pesquero industrial durante la vigencia de la Ley Nº 19.713", para costear las asesorías que le serían otorgadas; XL) Comunicación sin fecha, suscrita por la Gerente de Administración y Finanzas de SERCOTEC y dirigida al Sr. Pedro Abarzúa Sáenz, por la que aquélla le pide la ratificación de los montos percibidos como beneficiario del "Programa de Capacitación, Apoyo social y Reconversión Laboral para trabajadores desplazados del sector pesquero industrial durante la vigencia de la Ley 19.713; xli) Documentos (2) denominados "Recepción de Cheque", de 22 de diciembre de 2003 y de 9 de febrero de 2004, por los cuales el Sr. Pedro Abarzúa Sáenz, da cuenta de haber recibido la suma indicada en el numeral 38.- precedente, en dos cuotas, de monto diverso cada una de ellas; xlii) Autorización simple, datada el 24 de noviembre de 2003 otorgada por el Sr. Pedro Abarzúa Sáenz, a cualesquiera encargados del Programa de Capacitación, Apoyo social y Reconversión Laboral, para trabajadores desplazados del sector pesquero industrial durante la vigencia de la Ley Nº 19.713" para que accedan a la información referida a sus ingresos entre los años 2001 y 2002; xliii) Recibo suscrito por el demandante Sr. José Polidoro Andrade Peña, el 9 de febrero de 2004, dando cuenta de la recepción



Foja: 1

de la suma de \$2.250.000.-, con relación al "Programa de Capacitación, Apoyo social y Reconversión Laboral para trabajadores desplazados del sector pesquero industrial durante la vigencia de la Ley № 19.713; xlv) Documentos (2) denominados "Recepción de Cheque", de 22 de diciembre de 2003 y de 9 de febrero de 2004, por los cuales el Sr- José Polidoro Andrade Peña, da cuenta de haber recibido la suma indicada en el numeral 43.- precedente, en dos cuotas, de monto diverso cada una de ellas; xlv) Certificado de Defunción de don José Polidoro Andrade Peña, fallecido eJ 24 de diciembre de 2006 e inscrito en la Circunscripción Concepción del Registro Civil con n°1507 del año 2006; xlvii) Certificado de Matrimonio contraído por doña Gabriela Esparza Huinca y don José Andrade Peña, en la Circunscripción Talcahuano del Registro Civil, el año 1981 e inscrito con el n°317 del año 1981.

18°) Que, la parte demandada acompañó documental no objetada consistente en: i) Copia de resolución exenta N°3353 de 15 de diciembre de 2003, de la subsecretaría de pesca del ministerio de economía, fomento y reconstrucción que fija nómina de beneficiarios del programa de capacitación, apoyo social y reconversión laboral para trabajadores desplazados del sector pesquero industrial durante la vigencia de la ley 19.713; ii) Copia de resolución exenta N°326 de 30 de enero de 2004 de la subsecretaría de pesca del ministerio de economía, fomento y reconstrucción que modifica nómina de beneficiarios del Programa de Capacitación, Apoyo Social y Reconversión Laboral; iii) Copia de resolución N° 4, de 6 de febrero de 2004 de la Subsecretaría de Pesca, que aprobó convenio de asistencia técnica entre la Subsecretaria de Pesca, el Ministerio de Economía y el Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) y el convenio de 30 de enero de 2004, con el objeto de implementar el pago del "Programa de Capacitación, Apoyo Social y Reconversión Laboral para trabajadores desplazados del sector pesquero industrial durante la vigencia de la ley 19.713", del año 2003; iv) Copia de resolución N°15 de 12 de diciembre de 2003, de la Subsecretaría de Pesca que aprobó el convenio de asistencia técnica celebrado en igual fecha entre la Subsecretaría de Pesca, el Ministerio de Economía y el Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), y el convenio mismo de 12 de diciembre de 2003, con el objeto de implementar el pago del "Programa de Capacitación, Apoyo Social y Reconversión Laboral para trabajadores desplazados del sector pesquero industrial durante la vigencia de la ley 19.713", del año 2003; v) Original de Oficio N°088 de 22 de diciembre de 2011, del Gerente General del Servicio de Cooperación Técnica que informa los pagos efectuados a los 7 actores de autos más don José Polidoro Andrade Peña por quien ha demandado su viuda, señalando el monto total de los pagos parciales y los documentos con que fueron efectuados, con motivo del "Programa de Capacitación, Apoyo Social y Reconversión Laboral para trabajadores desplazados del sector pesquero industrial durante la vigencia de la ley 19.713", del año 2003; vi) Copia



Foja: 1

Simple del informe N°150/2005 de 26 de julio de 2005 de la División de Auditoría Administrativa de la Contraloría General de la República efectuado al Programa de Capacitación, Apoyo Social y Reconversión Laboral para trabajadores desplazados del sector pesquero industrial durante la vigencia de la ley 19.713 y sus anexos N°2 y N°3; vii) Copia de la Ley 19713 de 25 de enero de 2001; viii) Copia de la Ley 19.849 de 26 de diciembre de 2002; ix) Copia del Decreto Supremo N°170; x) Copia del Decreto Supremo N° 180; xi) Copia Sentencia Definitiva de 1° Instancia dictada el 1 de agosto de 2017 en la causa “Zapata Sáez, Pedro y Otros con Fisco de Chile” del 28° Juzgado Civil de Santiago, Rol C-4147-2011 sobre indemnización de perjuicios; xii) Copia simple n°150/2005, de 26 de julio de 2005 de la División de Auditoría Administrativa de la Contraloría General de la República.

19°) Que además rindió prueba testimonial consistente en la declaración de los testigos doña Vivian Denisse Cerda Quiroz, don Jorge Alfonso Acevedo Karlezi y don Robinson Francisco Quiero Zárate.

20°) Que, los actores a fin de sustentar su pretensión consistente en que el Tribunal declare que “el demandado se encuentra obligado a pagar todos y cada uno de los beneficios contemplados en los cuerpos normativos legal y reglamentarios que se refieren a la capacitación, apoyo social y reconversión laboral para los trabajadores que, durante el período de vigencia de la ley N°19.713, hayan perdido su empleo” argumentan que siendo admitidos como beneficiarios del “Programa de Capacitación, Apoyo Social y Reconversión Laboral para trabajadores desplazados del sector pesquero industrial durante la vigencia de la Ley 19.713” del año 2003, dichos beneficios no les han sido entregados en su totalidad, recibiendo determinadas sumas dentro del marco de etapa inicial del referido programa, encontrándose obligado el Estado hasta la fecha de interposición de la demanda a pagar los beneficios que les correspondería por aplicación de la Ley 19.713 modificada por la Ley 19.849 y reglamentada por los Decretos Supremos N° 179 y 180 del año 2003.

21°) Que, planteada así la controversia, resulta necesario tener presente lo dispuesto en la normativa pertinente contenida en los Decretos Supremos N°179 y 180 de 2003, estos últimos relacionados a las leyes 19.713 y 19.849.

22°) Que, el Decreto Supremo n° 180 de 2003, crea el “Programa de Capacitación, Apoyo Social y Reconversión Laboral para trabajadores desplazados de sector pesquero industrial durante la vigencia de la Ley 19.713”, el que comprende como beneficios el “Fomento y Apoyo al Empleo Independiente” por medio de transferencias al FOSIS o SERCOTEC, financiando la capacitación y asesoría para un plan de emprendimiento, capacitación y educación micro empresarial.



Foja: 1

En el mismo sentido, el artículo 11° de la normativa en análisis dispone que corresponderá al Consejo de Administración Pesquera la definición de tales coberturas y las condiciones de cada uno de los beneficios señalados.

23°) Que, en cuanto al Decreto Supremo N°179 de 2003, que aprueba criterios y procedimiento para la asignación de beneficios del “Programa de Capacitación, Apoyo Social y Reconversión Laboral para trabajadores desplazados del sector pesquero industrial bajo la vigencia de la ley 19.713” éste define los “beneficios” como aquellas prestaciones que se especifican en el D.S. N°180 y que tales prestaciones se concederán a partir de la fecha en que se cierre el proceso de definición y/o selección de beneficiarios el que, en conformidad al principio de legalidad del gasto público en materia financiera, requiere de una resolución y acto administrativo que así lo ordene, surgiendo desde ese momento la adjudicación para el beneficiario, persona natural, generándose una obligación concreta del Estado para con los beneficiarios.

24°) Que, conforme al petitorio, los actores no pretenden que el Tribunal declare el reconocimiento de derechos personales adquiridos en virtud de la postulación y adjudicación por acto administrativo de beneficios genéricos y abstractos por legislador a determinado segmento social de pescadores al que pertenecerían, sino más bien, en forma abstracta, que se declare la obligación del demandado a pagar todos y cada uno de los beneficios contemplados en los cuerpos normativos legal y reglamentarios que se refieren a la capacitación, apoyo social y reconversión laboral para los trabajadores que, durante el período de vigencia de la Ley 19.713 hayan perdido su empleo. Así planteado resulta ajeno al ámbito de competencia del Tribunal, toda vez que la facultad de conocer, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado se enmarca en el ámbito de derechos y obligaciones concretas y a cada caso particular.

25°) Que conforme a lo que se ha venido razonando la demanda será desestimada, como se dirá en definitiva.

26°) Que, los demás antecedentes allegados y no pormenorizados en nada alteran lo concluido precedentemente.

Y teniendo presente, además, lo dispuesto en los artículos 1698, 1700, y demás normas pertinentes del Código Civil; 144, 160, 161, 162, 170, 254, y siguientes demás normas del Código de Procedimiento Civil; Ley 19.713, Ley 19.849 y Decretos Supremos números 179 y 180 de 2003, se declara:

I.- Que se acogen las tachas establecidas en el artículo 358 n° 1 del Código de Procedimiento Civil opuestas por el demandado respecto de los testigos don Eduardo Jara Carriel y don Ulises Armando Daza Ramírez.



Foja: 1

II.- Que se rechazan las tachas establecidas en el artículo 358 n°5 del Código de Procedimiento Civil opuestas por el demandante en contra de los testigos doña Vivian Denisse Cerda Quiroz, don Jorge Alfonso Acevedo Karlezi y don Robinson Francisco Quiero Zárate.

III.- Que se rechazan las excepciones de litispendencia, pago y prescripción.

IV.- Que se rechaza en todas sus partes la demanda de autos.

V.- Que se condena en costas a la parte demandante.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad archívense.

Pronunciada por doña Claudia Donoso Niemeyer, Juez Titular;
Autorizada por doña Marta Hurtado Vásquez, Secretaria Subrogante.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintiocho de Enero de dos mil diecinueve**



